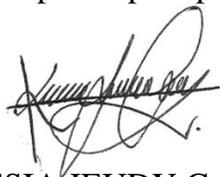


CONSTANCIA SECRETARIAL: En la fecha 5 de marzo, dejo constancia que, el presente incidente de desacato no tiene solicitudes adicionales pendientes.

A despacho para proveer.



KESIA JEUDY GARCÍA JAIMES
Escribiente



**JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD
MEDELLÍN, CINCO (05) DE MARZO DE DOS MIL
VEINTICUATRO (2024)**

Proceso:	Incidente de Desacato
Accionante:	Angie Lorena Garcia Serna
Afectado:	Erick Andrey Cuadros García
Accionado:	Alianza Medellín – Antioquia EPS S.A.S. «Savia Salud EPS S.A.S.»
Radicado:	05001 40 03 005 2022-00655 00
Decision:	Define Incidente de Desacato-Sanciona

Procede el despacho, a resolver lo que en derecho corresponda, dentro del incidente por presunto desacato a orden de tutela, que se viene tramitando en contra de la accionada **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»**, representada por el Doctor **EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR** como interventor, el cual fuera promovido por la accionante la señora **ANGIE LORENA GARCÍA SERNA**.

ANTECEDENTES.

El día 16 de diciembre de 2022, este Despacho profirió sentencia en primera instancia en la que se **CONCEDIÓ LA TUTELA** a los derechos fundamentales de **SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA** y los **DERECHOS DE LOS NIÑOS**, en la acción de tutela promovida por la accionante señora **ANGIE LORENA GARCÍA SERNA**, quien funge como agente oficioso de su hijo menor de edad **ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA**, en contra de la accionada **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»**, ordenándole a la accionada:

«1.-TUTELAR al menor ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA, los derechos a la SALUD y la SEGURIDAD SOCIAL, así atendidos como fundamentales en conexidad con el derecho constitucional fundamental de primera generación de la VIDA

DIGNA, que tal carácter tienen para ella, aparte del de PREVALENTES, por virtud de la norma superior del Art. 44 de la Constitución Política, que así califica todos los DERECHOS DE LOS NIÑOS allí mencionados además del “INTERÉS JURIDICO SUPREMO DEL MENOR” y la GARANTÍA DE SU DESARROLLO ARMÓNICO E INTEGRAL, para los que pidió protección, la señora ANGIE LORENA GARCÍA SERNA, frente a la accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S “SAVIA SALUD EPS S.A.S. 2.-ORDENAR en consecuencia a la accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S “SAVIA SALUD EPS S.A.S.” como lo norman los Arts. 27 y 29, nl. 5° del Decreto 2591 de 1991, que dentro del término perentorio de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la de la notificación de esta sentencia, le programe -siempre que de ese modo no hubiera obrado antes, proceda a disponer de todo lo necesario para autorizarle y suministrarle a la menor de edad ERICK ANDREY CUADROS los servicios de salud consistente en CONSULTA DE CONTROL NEUOMOLOGÍA PEDIATRICA”, “CITA DE CONTROL CON CARDIOLOGÍA PEDIATRICA” “CITA DE CONTROL CON NEUROLOGÍA PEDIATRICA”, “RESONANCIA MAGNETICA DE CEREBRO” “RESONANCIA MAGNETICA DE CORAZÓN 3.-DISPONER que en forma oportuna y una vez se cumpla en el término señalado en los numerales anteriores, la EPS accionada comunique al Juzgado por escrito, la forma como ha procedido y cómo está haciéndolo hasta que a la afiliada cuyos derechos se tutelan, se le haya proporcionado los servicios de salud que requiere. 4.-ORDENAR a ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S “SAVIA SALUD EPS S.A.S. brindar a la menor de edad ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA, el tratamiento integral que se derive de las patologías diagnosticadas como “D151 – TUMOR BENIGNO DE CORAZÓN”, “E440 - DESNUTRICIÓN PROTEICOCALORICA MODERADA” y “J22X – INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA VÍAS RESPIRATORIAS, es decir, debe el mismo contener todo cuidado, suministro de medicación, procedimientos, evaluaciones, terapias, práctica de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, y todo otro componente que los profesionales de la salud tratantes valoren como necesario para el restablecimiento del estado de salud y de su calidad de vida, precisando que en aquello que no tenga cobertura en el Plan de Beneficios en Salud a la demandada, le asiste el derecho de repetir o de recobrar ante la entidad territorial competente. 5.-ADVERTIR que el incumplimiento de lo anterior, por la EPS accionada, la hará merecedora de las sanciones contempladas en los Arts. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1.991, Decreto 1069 de 2015, previo trámite incidental. 6. DISPONER que esta decisión se notifique tanto a la parte accionante, como a las accionadas, de conformidad con el Art. 16 del Decreto 2591 de 1.991 y el Art. 5° del Decreto 306 de 1.992, por el medio más eficaz. En el acto de la notificación, se hará saber a las partes, que procede la impugnación del fallo en el término de los tres (3) días siguientes al de la notificación, ante los Señores(as) Jueces Civiles de Circuito de Medellín (Reparto), SIN PERJUICIO DEL CUMPLIMIENTO INMEDIATO.»

En este caso, la accionante señora ANGIE LORENA GARCÍA SERNA, en calidad de agente oficioso del menor ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA, presentó solicitud de incidente de desacato, expresando en lo esencial que la accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S», no ha dado cumplimiento a lo ordenado por el Despacho en la sentencia de tutela con fecha de 16 de diciembre de 2022, en lo concerniente al tratamiento integral que se derive de las patologías diagnosticadas como «D151 – TUMOR BENIGNO DE CORAZÓN», «E440 - DESNUTRICIÓN PROTEICOCALORICA MODERADA» y «J22X – INFECCIÓN AGUDA NO ESPECIFICADA VÍAS RESPIRATORIAS».

Se dispuso mediante auto del 21 de febrero de 2024, la realización del requerimiento previo al accionado Doctor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR como interventor de la accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S» a quien se le notifico mediante oficio No 1046 del 23 de febrero de 2024, que se remitió a través de correo electrónico, para que si así lo estimaba se pronunciara. Pese de que fue notificado en debida forma, el señor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR, no presentó pronunciamiento alguno.

El Despacho dispuso la apertura del incidente de desacato en contra de ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S» a través de auto proferido el 28 de febrero de 2024, mediante el cual se conminó al Doctor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR como interventor de la accionada, para que en un término de tres (3) días ejerciera su derecho de defensa, auto que se comunicó mediante oficios No. 1179 y 1180, de fecha 29 de febrero de 2024.

La parte accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S», dentro del término del traslado otorgado, remite informe al auto de apertura, informando que se pone en conocimiento del Juzgado que:

«(...) Programación de la CONSULTA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA autorizada con NUA 23951129 direccionada a la CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRIA autorizada con NUA 23951123 direccionada a la CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN Institución a quien se envió correo solicitando apoyo con la programación.

Con relación a los exámenes de laboratorio ELECTROLITOS EN SUDOR (IONTOFORESIS) MEDICION DIRECTA, VITAMINA D 25 HIDROXI TOTAL [D2-D3] [CALCIFEROL] E INMUNOGLOBULINA E [IG E] AUTOMATIZADO se informa al Despacho que, fueron autorizados desde el mes de diciembre de 2023 con NUA 23951116 para el LABORATORIO ADILAB, los cuales no requieren cita previa, se realizan de lunes a sábado en el horario de 7:00 am a 10:00 am, información que se comunicó a la Sra. Claudia serna (abuela) en el número 3012190395 CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR NUTRICION Y DIETETICA autorizada con NUA 23951205 direccionada a la IPS REHAFINT IPS SAS institución a quien se envió correo solicitando apoyo con la programación (...)»

Entonces, el accionado no probó el cumplimiento total de la sentencia en cuanto no se ha programado los servicios de CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA; CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA; CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN

PEDIATRÍA; CONSULTA POR PRIMERA VEZ EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA y los exámenes de laboratorio: ELECTROLITOS EN SUDOR (IONTOFORESIS) MEDICIÓN DIRECTA; VITAMINA D25 HIDROXI TOTAL (D2, D3) (CALCIFEROL), INMUNOGLOBINA E (IG E) AUTOMATIZADO, ordenados por los médicos tratantes, orden dictada en el fallo de tutela proferido en lo concerniente al tratamiento integral y del cual es objeto el presente trámite de incidente de desacato.

ARGUMENTACIONES.

Es competente este despacho para adelantar el trámite incidental consagrado en el Art. 52 del decreto 2591 de 1991, Decreto 333 de 2021, pues fue el mismo que emitió la orden de protección constitucional.

Por lo anterior, el mismo Decreto 2591 de 1991, radica en cabeza del Juez de primera instancia la obligación de velar por el cumplimiento cabal de la orden impartida.

La labor del Juez no es solamente tramitar el incidente de desacato cuando se instaure por incumplimiento de lo ordenado, lo fundamental es que sea efectivo el respeto a los derechos fundamentales; por lo que el Juez de la primera instancia no pierde la competencia hasta tanto la orden sea completamente acatada.

Dispone el Juez Constitucional, de la herramienta que consagra el Art. 52 del mencionado Decreto, norma que en su tenor literal dispone: *«La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el presente Decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción».*

De esta manera la figura jurídica del desacato se traduce en una medida de carácter coercitivo y sancionatorio, con que cuenta el Juez de conocimiento de la tutela, en ejercicio de su potestad disciplinaria, para sancionar con arresto y multa a quien desatiende las órdenes o resoluciones judiciales que se han expedido para hacer efectivo la protección de derechos fundamentales a favor de quien o quienes han solicitado su amparo.

Como lo tiene dicho la Jurisprudencia, que una vez el Juez ha encontrado vulnerado o amenazado un derecho fundamental, la orden que profiera para protegerlo debe ser cumplida pronta y cabalmente. En este sentido, ha reiterado que el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, así como el principio de seguridad jurídica, obligan a quien esté dirigida la orden de tutela a cumplirla de manera oportuna, en los términos que se hubiera establecido por la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada. La vigencia de los derechos fundamentales quedaría gravemente

comprometida si, frente al rol protector de la acción de amparo, los destinatarios de las órdenes pudieren sustraerse a su efectiva ejecución, sin consecuencias. También ha quedado claro que la solicitud de cumplimiento de la sentencia de tutela y el incidente de desacato, son medios idóneos y eficaces para exigir el cumplimiento de tales providencias. Y se ha precisado en relación con el incidente de tutela que *«el juez que decida sobre la procedencia y prosperidad de la acción de tutela contra decisiones proferidas durante el trámite incidental de desacato, no podrá reabrir el debate realizado con ocasión de la tutela anterior, pues su análisis se encuentra circunscrito a las decisiones proferidas durante el trámite de desacato en cuestión, acerca de la presunta vulneración de los derechos fundamentales del demandante; por tanto, no está facultado para revisar la decisión original de amparar el derecho ni cambiar el alcance o contenido sustancial de las órdenes desacatadas, con relación a las cuales opera el fenómeno de cosa juzgada. Bajo este derrotero, la Corte Constitucional igualmente ha precisado que el juez en estos casos, para poder determinar si existió alguna vulneración de los derechos fundamentales, debe verificar la autoridad a quien estaba dirigida la orden, el término otorgado para ejecutarla, el alcance de la misma y si el incumplimiento fue integral o parcial. En este punto, se hace necesario precisar que el juez para conocer el alcance de la orden de tutela y poder determinar si la autoridad judicial que conoció del trámite incidental de desacato actuó de conformidad, deberá, en aquellos casos en que la orden sea compleja o poco precisa, identificar la ratio decidendi, entendiendo por ella la formulación del principio, regla o razón que constituyen la base de la decisión específica.»* (Sentencia T-509 de 2013).

En reciente providencia la jurisprudencia señaló: *«En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela»*. Sobre el particular esta Corporación ha señalado:

«30.-Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respectivo incidente tiene el deber constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto, dentro del proceso debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos.»

«31.-De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueces a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas, siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.» *32.-En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal sustentado en la culpa o el dolo.»* *«Así las cosas, el solo incumplimiento del fallo no da lugar a la imposición de la sanción, ya que es necesario que se pruebe la negligencia o el dolo de la persona*

que debe cumplir la sentencia de tutela. En consonancia con lo anterior, la Corte ha precisado que en el momento de analizar si existió o no desacato deben tenerse en cuenta situaciones especiales que pueden constituir causales exonerativas de responsabilidad, aclarando que no puede imponerse sanción cuando: (i) la orden impartida por el juez de tutela no ha sido precisa -porque no se determinó quien debe cumplirla o su contenido es difuso y, (ii) cuando el obligado de buena fe quiere cumplir la orden pero no se le ha dado la oportunidad de hacerlo (sentencias T-1113 y T-368 de 2005)» (Sentencia T-271 de 2015).

En la misma providencia se dejó claro que para sancionar por desacato es necesario que el Juez establezca si el sujeto obligado ha adoptado alguna conducta positiva o negativa de la cual pueda inferirse que ha actuado con el ánimo (culpa o dolo) de evadir los mandatos de una autoridad judicial o si, por el contrario, ha obrado de buena fe; y que la simple constatación del incumplimiento sin haber escudriñado las circunstancias que le propiciaron, no puede devenir en una sanción por desacato, debido a que ello constituiría una responsabilidad objetiva del sujeto obligado, concepto que está prohibido.

Además, se precisó en dicho pronunciamiento que «La Corte ha reiterado que, dada la naturaleza especial que tiene el incidente de desacato, el juez que conoce del mismo no puede volver sobre los juicios o las valoraciones que hayan sido objeto de debate en el respectivo proceso de tutela, ya que ello implicaría “revivir un proceso concluido afectando de esa manera la institución de la cosa juzgada”. De acuerdo con lo anterior, el ámbito de acción del operador judicial en este caso está definido por la parte resolutive del fallo correspondiente. En este orden de ideas, la autoridad judicial que decide el desacato debe limitarse a verificar: “(1) a quién estaba dirigida la orden; (2) cuál fue el término otorgado para ejecutarla; (3) y el alcance de la misma. Esto, con el objeto de concluir si el destinatario de la orden la cumplió de forma oportuna y completa (conducta esperada). (Sentencias T-553 de 2002 y T-368 de 2005). “Adicionalmente, el juez del desacato debe verificar si efectivamente se incumplió la orden impartida a través de la sentencia de tutela y, de existir el incumplimiento, debe identificar si fue integral o parcial. Una vez verificado el incumplimiento debe identificar las razones por las cuales se produjo con el fin de establecer las medidas necesarias para proteger efectivamente el derecho (...)».

El Consejo de Estado, en la providencia del 21 de enero de 2013, en el proceso radicado No. 05001-23-33-000-2012-00001-01, con ponencia del Consejero DR. ALFONSO VARGAS RINCÓN, expresó: *«Para que proceda la sanción, deben darse las siguientes condiciones: que exista una orden dada en fallo de tutela; que dicho fallo se haya notificado a la autoridad encargada de hacer cumplir la orden impuesta; que haya vencido el plazo sin que se cumpla la orden; y que haya contumacia en el cumplimiento del fallo»*

Examinadas las órdenes expresadas en la parte resolutive de la sentencia pronunciada el 16 de diciembre de 2022, se deduce con claridad meridiana que el amparo constitucional de los derechos fundamentales de la SALUD, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA y los DERECHOS DE LOS NIÑOS, en la acción de tutela promovida por la señora ANGIE LORENA GARCÍA SERNA, quien funge como agente oficioso de su hijo menor de edad ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA en contra de ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD

EPS S.A.S», representada por el doctor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR como interventor de la accionada, para que proceda en virtud del tratamiento integral concedido, a programar al menor los servicios de CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA; ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO Y CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN CARDIOLOGÍA PEDIÁTRICA; CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN NEUMOLOGÍA PEDIÁTRICA; CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA; CONSULTA POR PRIMERA VEZ EN NUTRICIÓN Y DIETÉTICA y los exámenes de laboratorio: ELECTROLITOS EN SUDOR (IONTOFORESIS) MEDICIÓN DIRECTA; VITAMINA D25 HIDROXI TOTAL (D2, D3) (CALCIFEROL), INMUNOGLOBINA E (IG E) AUTOMATIZADO, si aún no ha procedido de ese modo o no los ha efectuado completo, orden que se encuentra en desacato, toda vez que las autorizaciones estaban dadas antes de iniciarse el trámite incidental y la entidad no realizó nada para concretar la atención del menor.

La actora, como es evidente promovió el presente incidente de desacato, persiguiendo el acatamiento del mandato impartido por vía de tutela, en lo referente al cumplimiento de la sentencia proferida el pasado 16 de diciembre de 2022.

A propósito, en este trámite incidental de desacato, el despacho ha garantizado los derechos al debido proceso y de defensa de la persona contra quien se ejerce, en tanto se comunicó al señor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR quien obra como interventor de ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S» sobre la iniciación del mismo, dándole la oportunidad para que informara la razón por la cual no ha dado cumplimiento a la orden; para que presentara los argumentos de defensa pertinentes y para que solicitara las pruebas que pretendiera hacer valer.

En este caso, valga decir que la accionada, ha dispuesto de un tiempo prolongado para cumplir la orden impartida en el fallo de tutela, así también tuvo a su disposición la oportunidad para exponer y presentar las razones para no hacerlo, sin embargo, se ha dispuesto a incumplir la orden, sin presentar las razones que justifiquen su conducta abiertamente omisiva e intencional, dejando sin amparo los derechos fundamentales de la accionante, generando frustración frente al fallo de tutela, situación inconcebible en un Estado Social de Derecho, como primacía de los derechos fundamentales como lo establece la Constitución Política de Colombia.

Aunado a lo anterior, es claro que el accionado ha sustraído a sus obligaciones y ha sido renuente en dar cumplimiento a la orden impartida

en el fallo de tutela proferido el 16 de diciembre de 2022, por cuanto no ha programado los servicios de salud requeridos.

Así las cosas, está demostrado el incumplimiento del fallo de tutela por parte de accionada ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S», representada por el doctor EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR como interventor de la accionada, además se encuentra probada la negligencia y el dolo por parte del accionado, ya que es la persona que debe cumplir la sentencia de tutela, en aquello que a la accionante interesa. Aquí no solo se trata del hecho del incumplimiento del fallo por parte del accionado, sino que está comprobada la negligencia de ésta frente al cumplimiento del fallo, pues ha quedado demostrada su intención de desobedecer la providencia judicial, a sabiendas de las consecuencias que sobre él se ciernen, más si se tiene en cuenta, que hasta la saciedad el despacho le ha ordenado el cumplimiento en forma por demás insistente.

Han quedado en este asunto, efectuadas todas las verificaciones indicadas por la jurisprudencia constitucional y colmados, todos los presupuestos necesarios para imponer las sanciones procedentes.

En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, al señor **EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR** quien obra como interventor de **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»**, se le impondrá como sanción adecuada y razonable conforme a las circunstancias adscritas por desacato del fallo de tutela, **MULTA DE TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, que deberá depositar a favor del Estado dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en esta decisión quede debidamente ejecutoriada.

Con fundamento en lo expuesto, el **JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE MEDELLÍN**, «Administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por Mandato Constitucional»,

RESUELVE:

1.-SANCIONAR por desacato al señor **EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR** quien obra como interventor de **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»**, dentro del incidente que fuera promovido por la accionante la señora **ANGIE LORENA GARCÍA SERNA**, quien obra como agente oficioso de su hijo menor de edad **ERICK ANDREY CUADROS GARCÍA**, en razón de las motivaciones expuestas.

2.-En consecuencia, se le impone las siguientes sanciones al doctor **EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR** quien obra como interventor de **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»** **MULTA DE TRES SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, que deberá depositar a favor del Estado dentro de los tres (3) días siguientes a aquél en esta decisión quede en firme. Expídanse los oficios pertinentes.

3.-Esta decisión será Consultada al Superior Funcional, para el caso, los señores **JUECES CIVILES DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN**.

4.-Copia de esta providencia se le remitirá a la Oficina de Cobro Coactivo de la Administración Judicial Seccional Medellín para lo pertinente, en caso de ser confirmada esta decisión en sede de consulta y se presente incumplimiento en el pago de la sanción.

5.-**REQUERIR** al doctor **EDWIN CARLOS RODRIGUEZ VILLAMIZAR** quien obra como interventor de **ALIANZA MEDELLÍN-ANTIOQUIA EPS S.A.S «SAVIA SALUD EPS S.A.S»**, el cumplimiento estricto de la orden de tutela proferida en el fallo del 16 de diciembre de 2022.

NOTIFÍQUESE,

LA JUEZA,



SONIA PATRICIA MEJÍA.